

EXCMO SR.

D. **JOSÉ DOMINGO DOMINGO** con DNI 36934644W en representación de la asociación **IMPULSO CIUDADANO**, con NIF G65154239, y domicilio en c/ Industria, 60 Local 7, Barcelona (Barcelona) inscrita en el registro con nº 40.512.

Comparece en el procedimiento de aprobación del Reglamento de Uso de la Lengua Catalana del Ayuntamiento de Barcelona, cuya aprobación inicial ha sido publicada en el BOP de 23/11/09, y formula las siguientes

ALEGACIONES:

Las alegaciones que afectan a diversos preceptos del proyecto, se formulan conjuntamente. Y si diversas alegaciones afectan a un mismo precepto, éste incluye en el apartado correspondiente a cada una de ellas.

1.- ALEGACIONES REFERENTES A LA PREVISIÓN DE PREFERENCIA O NORMALIDAD SÓLO DEL CATALÁN

En relación con las previsiones de normalidad exclusivas para el catalán, debe comenzarse por recordar que es cierto que la STC 337/1994 declaró constitucional el art. 20 de la Ley de Normalización de 1983, que aludía sólo a la lengua catalana como lengua normal. Pero debe recordarse también que el TC fundamentó expresamente dicha decisión, en que en otro precepto de la misma Ley se garantizaba de igual manera la normalidad del castellano:

“Aun teniendo la Ley aquí considerada como objetivo principal la normalización del uso de la lengua catalana en todos los ámbitos, no cabe olvidar que también está dirigida a «garantizar el uso normal y oficial del catalán y del castellano» (art. 1.1 de la Ley, con referencia al art. 3 del E.A.C.)” (STC 337/1994, F.D. 21, párrafo IV)

En definitiva, el TC tiene establecido que el castellano como lengua oficial, debe tener un uso normal:

“Hemos visto que, según el número 1 del art. 3 de la Constitución, el castellano es la lengua española oficial del Estado, y entendiéndose obviamente aquí por «Estado» el conjunto de los poderes públicos españoles, con inclusión de los autónomos y locales, ... es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos ... Ello implica que el castellano es medio de

comunicación normal de los poderes públicos y ante ellos en el conjunto del Estado español” (STC 82/1986 sobre la Ley 10/1982 de Normalización del Uso del Euskera, fd. 2º).

Por lo tanto, las previsiones que sólo aluden al catalán, y no al castellano, como lenguas de uso normal, son nulas.

Por otro lado, debemos aludir a las previsiones que aluden al catalán como lengua preferente, o le otorgan alguna suerte de preferencia concreta.

En relación con éstas, hay que recordar que según el TC, la normalización del catalán se justifica en el carácter marginal que tenía en 1983, y que su finalidad es sólo corregir una situación de precariedad.

Debe recordarse que si se admitió que en 1983 el catalán fuera “*centro de gravedad*”, fue sólo en atención a que se encontraba en una posición “*marginal y secundaria*” y para “*corregir situaciones de desequilibrio heredadas históricamente*”:

“Dentro de estas acciones políticas se incluyen, como ya se ha declarado por este Tribunal, las disposiciones de las Comunidades Autónomas encaminadas a promover la normalización lingüística en su territorio (SSTC 69/1988 y 80/1988). Disposiciones cuyo objetivo general no es otro que la de asegurar el respeto y fomentar el uso de la lengua propia de la Comunidad Autónoma y cooficial en ésta y, a este fin, corregir positivamente una situación histórica de desigualdad respecto al castellano, permitiendo alcanzar, de forma progresiva y dentro de las exigencias que la Constitución impone, el más amplio conocimiento y utilización de dicha lengua en su territorio.

A esta finalidad responde la Ley 7/1983, de 18 de abril, de Normalización Lingüística en Cataluña. De un lado, su Exposición de Motivos alude expresamente a una situación de precariedad del catalán, como resultado de un proceso histórico iniciado en el siglo XVIII y que no ha estado exento, en ciertos períodos, de prohibiciones y persecuciones; haciendo también referencia a ello su art. 1.2, al determinar los objetivos de la normalización lingüística en atención a «la situación lingüística de Cataluña»...” (STC 337/1994, FD 7º párrafos II y III).

Y también el FD 10º (párrafo II) de la STC 337/1994:

“... De otro, al ser el catalán materia curricular y lengua de comunicación en la enseñanza, ello asegura que su cooficialidad se traduzca en una realidad social efectiva; lo que permitirá corregir situaciones de desequilibrio heredadas históricamente y excluir que dicha lengua ocupe una posición marginal o secundaria...”

Es decir, según la STC citada, la situación de la lengua catalana en 1983, era la de una lengua “*marginal o secundaria*”, en “*situación de precariedad*”, como producto de una “*desigualdad histórica*”, no exenta de “*prohibiciones y persecuciones*”.

Para corregir dicha situación, se han dictado normas que TRANSITORIAMENTE han podido tener por objeto la normalización del catalán, pero cuyo OBJETIVO FINAL era, como no podía ser de otra forma, garantizar el uso normal y oficial del catalán y del castellano.

“... para superar esta situación y restablecer al catalán «en el lugar que le corresponde como lengua propia de Cataluña», el objetivo general de la Ley -en correspondencia con lo dispuesto en el art. 3 del E.A.C.- es el de «llevar a cabo la normalización del uso de la lengua catalana en todos los ámbitos y garantizar el uso normal y oficial del catalán y el castellano» (art. 1.1)...”. (FD 7º, párrafo III de la STC 337/1994).

Sin embargo, en la actualidad, transcurridos más de 25 años desde 1983, no se recuerdan ya las épocas en que el idioma catalán haya podido padecer prohibiciones y persecuciones. Además, el catalán tampoco está en una situación de precariedad. Ni siquiera ocupa ya un lugar marginal y secundario en Cataluña.

Así lo ha acreditado el Instituto de Estadística de Cataluña, es un organismo autónomo de carácter administrativo, adscrito al Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña (art. 1 del Decret 34/2003, de 21 de Enero, de organización y funcionamiento del Instituto de Estadística de Cataluña).

Entre sus funciones se encuentra la de elaborar estadísticas de interés de la Generalidad (art. 2.b del citado Decret 34/2003).

Dicho organismo tiene publicado un estudio sobre conocimiento del idioma catalán en 2007 en Cataluña, del que resulta que:

el 93,80 % de la población catalana lo entiende,
el 75,60 % lo sabe hablar,
el 73,00 % lo sabe leer y
el 56,30 % lo sabe escribir.

Los datos de dicho estudio están publicados en la siguiente dirección web:

<http://www.idescat.cat/dequavi/Dequavi?TC=444&V0=15&V1=1>

Evidentemente, un idioma que entiende un 93,8% y escribe un 56,3%, está muy lejos de una situación de precariedad.

De modo análogo, en la actualidad el idioma catalán, no ocupa una posición marginal o secundaria en Cataluña.

El Instituto de Estadística de Cataluña tiene publicado otro estudio sobre usos lingüísticos referido a 2008, del que resulta que:

el 35,64 % de la población catalana tiene el catalán como su lengua habitual,
el 11,95 % tiene indistintamente como lengua habitual el catalán y el castellano y
el 45,92 % tiene el castellano como su lengua habitual.

Dicho estudio está publicado en la siguiente dirección web:

<http://www.idescat.cat/dequavi/Dequavi?TC=444&V0=15&V1=2>

De igual manera, una lengua que es de uso habitual para un 47,59% de la población (35,64 % exclusivo + 11,95 % indistinto con el castellano), está lejos de ser una lengua marginal o secundaria.

De modo que no hay ya base ninguna, para unas medidas de preferencia lingüística que perjudican otros bienes constitucionalmente protegidos, como la oficialidad del castellano.

Así, el uso normal del castellano tiene ya que recuperar plenamente su vigencia y con la misma preferencia que otras lenguas oficiales.

Por todo lo anterior, los siguientes preceptos incumplen la citada doctrina del TC:

Article 2

De conformitat amb el que disposa l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, la Carta Municipal de Barcelona i la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, el català és la llengua pròpia de Catalunya, i, com a tal, és la llengua oficial i d'ús normal i preferent de l'Ajuntament de Barcelona i ha de ser emprat de manera preferent en les seves tasques i relacions, amb les particularitats que resulten dels articles següents.

4.2. L'Ajuntament de Barcelona farà constar en el plec de condicions dels contractes administratius que aprovi l'Ajuntament de Barcelona que els seus adjudicataris de contractes presentin normalment la documentació en català i que facin ús del català en els béns i en els serveis que són objecte del contracte. En qualsevol cas, els prospectes, catàlegs i altres documents d'oferta de serveis estaran redactats, almenys, en català, sempre que es tracti d'empreses que tinguin establiments oberts al públic. Aquests requisits han de constar en el plec de condicions dels contractes administratius que aprovi l'Ajuntament.

5.1. En els procediments administratius tramitats per l'Ajuntament s'ha d'emprar el català, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a presentar documents, a fer manifestacions i, si ho sol·liciten, a rebre notificacions en castellà.

5.2. L'expedició de documents o de testimoniatges d'expedients es farà en català o, si la persona sol·licitant ho demana, en català i castellà.

5.3. Les comunicacions i les notificacions dirigides a persones físiques i jurídiques residents en l'àmbit lingüístic català s'han de fer normalment en llengua catalana, sense perjudici del dret de les ciutadanes i ciutadans a rebre-les també en castellà, si ho demanen.

Article 6

Els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a emplenar-los en castellà. Les versions castellanes estaran a disposició de les persones interessades a petició d'aquestes.

Article 7

En les seves comunicacions administratives orals, el personal de l'Ajuntament de Barcelona ha d'emprar la llengua catalana, llevat que l'administrat o l'administrada demani ser atès/atesa en castellà. Així mateix, es pot recórrer a qualsevol llengua o

Article 12

La retolació pública de tota mena que depengui de l'Ajuntament s'ha de redactar en català, llevat dels casos que per motius justificats puguin aconsellar la utilització del castellà o d'alguna altra llengua, si bé en aquest cas la versió catalana hi figurarà de forma preferent.

14.4. En els mitjans de radiodifusió, de televisió o de difusió digital gestionats per l'Ajuntament de Barcelona, la llengua normalment emprada ha d'ésser la catalana, tal com estableix l'article 25.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, d'acord amb la instrucció del Consell de l'Audiovisual de Catalunya de 19 de desembre (Acord 295/2007) i d'acord amb el Reglament d'organització i funcionament del servei públic de televisió local de Barcelona (BTV) aprovat pel Consell Municipal en sessió de 30 de maig de 2008.

Article 14

14.1. Els llibres, les revistes i, en general, tots els cartells, opuscles i publicacions que editi l'Ajuntament de Barcelona, com també els missatges que s'emetin a través dels mitjans de comunicació i la publicitat institucional, s'han de fer normalment en català, llevat dels específicament destinats a la promoció exterior, als usos turístics, o quan altres circumstàncies ho aconsellin, que es poden fer en la llengua de les persones destinatàries. Per a la mediació intercultural també es poden fer en la llengua de les persones destinatàries, acompanyats de la versió en llengua catalana.

14.4. En els mitjans de radiodifusió, de televisió o de difusió digital gestionats per l'Ajuntament de Barcelona, la llengua normalment emprada ha d'ésser la catalana, tal com estableix l'article 25.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, d'acord amb la instrucció del Consell de l'Audiovisual de Catalunya de 19 de desembre (Acord 295/2007) i d'acord amb el Reglament d'organització i funcionament del servei públic de televisió local de Barcelona (BTV) aprovat pel Consell Municipal en sessió de 30 de maig de 2008.

Article 15

Els càrrecs de l'Administració municipal, siguin o no electes, s'han d'expressar normalment en català en els actes públics celebrats i les actuacions fetes dins l'àmbit lingüístic català, quan la intervenció sigui per raó del càrrec o representin la corporació sense perjudici d'utilitzar també altres llengües.

Article 16

Les entitats que rebin una subvenció de l'Ajuntament es comprometen a utilitzar preferentment el català en tot el material gràfic i audiovisual adreçat al públic (cartells, anuncis, comunicats, etc.) quan estigui vinculat a l'objecte de l'ajut o el conveni, i així s'haurà de preveure en els corresponents convenis i bases.

Article 17

17.1. La publicitat institucional de l'Ajuntament de Barcelona serà normalment en català. En aquells casos en què els destinataris específics de la campanya siguin persones no residents habitualment en els territoris en què la llengua catalana és oficial, es podrà fer també en altres llengües.

17.2. Així mateix, l'Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè, d'acord amb el que preveu l'article 35.2 de la Llei 1/1998 de política lingüística, la publicitat que utilitzi suports públics –espais, transport públic, opis, fanals o altre mobiliari urbà- així com aquella per a la qual sigui necessària l'obtenció d'una llicència –publicitat a la via pública, de lones en bastides i altres- es facin normalment en català.

17.2. Així mateix, l'Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè, d'acord amb el que preveu l'article 35.2 de la Llei 1/1998 de política lingüística, la publicitat que utilitzi

suports públics –espais, transport públic, opis, fanals o altre mobiliari urbà- així com aquella per a la qual sigui necessària l'obtenció d'una llicència –publicitat a la via pública, de lones en bastides i altres- es facin normalment en català.

22.3. La formació professional del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de

Barcelona de qualsevol nivell s'ha de fer normalment en llengua catalana, sempre que la programació i l'organització depengui de l'Ajuntament de Barcelona. Si no en depèn però l'entitat organitzadora rep algun tipus de suport econòmic municipal, l'Ajuntament de Barcelona ha de demanar que es faci en català.

27.1. La retolació i la senyalització viària –provisional o fixa- que depengui de l'Ajuntament de Barcelona o que instal·lin les seves empreses adjudicatàries o concessionàries o qualsevol altra entitat que actuï, en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, han de figurar preferentment en català, sense perjudici del que disposen les normes que regulen el trànsit i la seguretat vial.

Article 29

L'Ajuntament de Barcelona garantirà, en l'àmbit de les seves competències l'aplicació de l'article 26 de la Llei 3/1993, de 5 de març, de l'estatut del consumidor i de l'article 30 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en el sentit que les seves empreses i les empreses concessionàries que gestionen o exploten el servei concedit, han d'emprar normalment el català en llurs actuacions i documentació internes i en la retolació. Així mateix, les instruccions d'ús, l'etiquetatge i l'embalatge dels productes o els serveis que produeixen o ofereixen han de ser, com a mínim, en català.

En consecuencia, se propone que en los citados preceptos, donde se dice "catalán" se diga "catalán o castellano" o bien "catalán y castellano", según los casos.

2.- ALEGACIONES RELATIVAS A LA IMPOSICIÓN DE USO EXCLUSIVO DEL CATALÁN:

La previsión de que sea el catalán la única lengua utilizada en cualquier ámbito de una Administración Pública, vulnera el principio de oficialidad del castellano establecido por el art. 3 de la Constitución.

Así lo han entendido además los Tribunales, en las diversas ocasiones en que han conocido de Reglamentos municipales que contenían tal previsión (TSJ de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª: STSJ 372/2004 y auto TSJ de 30/9/2009 recaído en el recurso ordinario 469/2008).

Incurrirían en esta causa de nulidad los preceptos que a continuación se relacionan:

3.1. Les actuacions internes de l'Ajuntament de Barcelona s'han de fer en català.

3.2. Les actes de les sessions que realitzi l'Ajuntament de Barcelona en Ple, la Comissió de Govern i les comissions informatives s'han de redactar en llengua catalana. També s'hi han de redactar les actes dels diversos organismes i entitats dependents de l'Ajuntament als quals es refereix l'apartat 1 de l'article 1 d'aquest Reglament.

3.4. Els impresos utilitzats pels diferents òrgans de l'Ajuntament de Barcelona i els rètols indicatius d'oficines i despatxos, les capçaleres de tota classe d'impresos, els segells de goma, els mata-segells i altres elements anàlegs han de ser escrits en català.

4.1. L'Ajuntament de Barcelona, en els contractes pels quals s'encarreguin a tercers estudis, projectes i treballs anàlegs, farà constar una clàusula en la qual s'especificarà que, en caràcter general, el treball s'ha de lliurar en llengua catalana. Excepcionalment, en el cas que la seva finalitat n'exigeixi la redacció en una altra llengua, se n'haurà de fer una versió en llengua catalana.

5.5.

llengües oficials del territori. Sens perjudici del que estableix l'art. 36.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i llevat que una norma de dret internacional o comunitari estableixi una altra cosa, els documents, les comunicacions i les notificacions adreçades a persones residents fora de l'Estat espanyol es faran en català i en la llengua oficial del territori on van adreçades.

Article 8

Sens perjudici del previst a l'apartat 3 de l'art. 15 de la Llei de política lingüística, els documents públics i els contractuals atorgats per l'Ajuntament de Barcelona s'han de redactar en català. En cas que l'Ajuntament de Barcelona concorri junt amb altres atorgants, el document s'ha de redactar també en la llengua que s'acordi.

Article 12

La retolació pública de tota mena que depengui de l'Ajuntament s'ha de redactar en català, llevat dels casos que per motius justificats puguin aconsellar la utilització del castellà o d'alguna altra llengua, si bé en aquest cas la versió catalana hi figurarà de forma preferent.

Del art. 17 se desprende "sensu contrario" la prohibición de utilizar el castellano, al prever supuestos en que "se podrá" utilizar el castellano, lo que implica que en los restantes no se podrá.

Article 17

17.1. La publicitat institucional de l'Ajuntament de Barcelona serà normalment en català. En aquells casos en què els destinataris específics de la campanya siguin persones no residents habitualment en els territoris en què la llengua catalana és oficial, es podrà fer també en altres llengües.

Article 18.

En els registres administratius de l'Ajuntament de Barcelona, els assentaments s'han de fer en català.

Article 26

26.1. L'Ajuntament de Barcelona ha de vetllar perquè tota la senyalització i la retolació situada dintre del terme municipal sigui en català en els termes previstos per la Llei.

Por ello, se propone la modificación de todos ellos, de manera que donde dice "catalán" se diga "castellano o catalán".

3.- ALEGACIONES RELATIVAS A LOS EFECTOS DEL REGLAMENTO FUERA DEL TÉRMINO MUNICIPAL, E INCLUSO FUERA DE LA CCAA DE CATALUÑA

El proyecto de Reglamento regula la realización de notificaciones, comunicaciones, intervenciones y publicidad oficiales, fuera del territorio del término municipal, e incluso fuera del territorio de la CCAA de Cataluña.

En este último supuesto el proyecto distingue dos tipos de territorio, los de ámbito lingüístico catalán, y los ajenos al mismo.

En primer lugar, destaca que la expresión "territorios de ámbito lingüístico catalán", por su indefinición, vulnera el principio de seguridad jurídica. Dicho término es susceptible de muy diversas interpretaciones, tanto en lo que respecta a que lenguas deben equipararse a la catalana a estos efectos, como al órgano competente para delimitar el ámbito lingüístico catalán, y la forma de dicha determinación.

La única interpretación acorde con la Constitución, es la que conlleva que se trate de territorios donde el catalán (estrictamente) esté configurado como lengua oficial, de acuerdo con el correspondiente Estatuto de Autonomía.

Pero aún así, tal previsión no respeta la previsión constitucional de que la cooficialidad de las lenguas, tendrá el alcance que cada estatuto disponga.

El art. 3.2 de la Constitución establece "*Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas CCAA de acuerdo con sus Estatutos*".

El recto entender de los preceptos constitucionales, debe llevar a considerar que la Constitución remitió a los Estatutos de autonomía la regulación de la cooficialidad, en el sentido de que dejaba libertad para atribuir o no dicha cooficialidad a la lengua de su territorio y también para determinar su alcance. Es decir, que los propios Estatutos podrían haber establecido la cooficialidad absoluta de la lengua autonómica en su territorio, de manera que alcanzara la plena equiparación al castellano. O podrían haber optado por limitar dicha cooficialidad, de manera que no alcanzara la plena equiparación. Pero esa es una decisión reservada al Estatuto de cada CCAA.

El TC tiene declarado que: *“el art. 3.2 de la de 1978 remite la regulación de la oficialidad de las lenguas españolas distintas del castellano a los Estatutos de Autonomía de las respectivas Comunidades Autónomas, y, sobre la base de éstos, a sus correspondientes órganos competentes, con el límite que pueda proceder de reservas constitucionales expresas. Los Estatutos contienen, de esta suerte, mandatos a las correspondientes instituciones autonómicas para regular la cooficialidad de las lenguas propias de las respectivas Comunidades Autónomas”* (STC 82/1986 sobre la Ley 10/1982 de Normalización del uso del Euskera, fd. 4º).

En consecuencia, el Reglamento de Barcelona no puede establecer una normativa del alcance de la cooficialidad del catalán fuera del término municipal de Barcelona y en menor medida puede hacerlo fuera de la CCAA de Cataluña, sin sujetarse a la normativa vigente en dichos territorios, y sin respetar el régimen de cooficialidad del catalán establecido en el correspondiente Estatuto.

Por lo tanto, los siguientes preceptos son nulos.

5.3. Les comunicacions i les notificacions dirigides a persones físiques i jurídiques residents en l'àmbit lingüístic català s'han de fer normalment en llengua catalana, sense perjudici del dret de les ciutadanes i ciutadans a rebre-les també en castellà, si ho demanen.

Article 9

Sens perjudici d'allò que disposi la legislació bàsica de l'Estat, la documentació que l'Ajuntament de Barcelona adreça a qualsevol de les administracions públiques situades dins l'àmbit lingüístic català s'ha de redactar en llengua catalana. En aquesta mateixa llengua s'han de redactar les comunicacions de l'Ajuntament de Barcelona adreçades a l'Administració General de l'Estat i als òrgans judicials dins l'àmbit lingüístic català.

14.2. Fora de l'àmbit lingüístic català, la publicitat s'ha de fer generalment en la llengua pròpia del lloc on s'adreça i, si escau, assegurant la presència perceptible del català.

Article 15

Els càrrecs de l'Administració municipal, siguin o no electes, s'han d'expressar normalment en català en els actes públics celebrats i les actuacions fetes dins l'àmbit lingüístic català, quan la intervenció sigui per raó del càrrec o representin la corporació sense perjudici d'utilitzar també altres llengües.

17.1. La publicitat institucional de l'Ajuntament de Barcelona serà normalment en català. En aquells casos en què els destinataris específics de la campanya siguin persones no residents habitualment en els territoris en què la llengua catalana és oficial, es podrà fer també en altres llengües.

Por todo ello se propone sustituir las expresiones "catalán" o "lengua catalana" por las de "castellano y las demás lenguas oficiales". Y la de "ámbito lingüístico catalán" por la de "CCAA de Cataluña".

4.- ALEGACIONES RELATIVAS A QUE SE PREVEAN GARANTÍAS DE USO O CONOCIMIENTO, SÓLO PARA EL CATALÁN:

Cualquier garantía relativa al uso oficial de un idioma, tiene que referirse indistintamente a cualquiera de los idiomas oficiales, o se ha de referir a ambos.

Siendo el castellano idioma oficial en Cataluña, la garantía de que se use oficialmente al menos un idioma, no puede referirse sólo al catalán.

Y en el caso de que se refiera a uno sólo, éste ha de ser el castellano.

De modo similar, si se considera que para determinados puestos es necesario acreditar un determinado conocimiento de las lenguas oficiales, esa exigencia debe ser común para ambas. No puede exigirse sólo la acreditación del conocimiento de una de ellas.

Se podría aducir de contrario que la titulación académica exigida para acceder a la función pública, acredita el conocimiento del castellano, y también del catalán, cuando se trate de quienes hayan terminado sus estudios en Cataluña con posterioridad a 1993.

Aún así, no puede exigirse a los aspirantes que no estén en este último caso, la acreditación especial de un nivel de conocimiento del catalán, cuando éste notoriamente sea superior (Nivel C) al que adquieren quienes están en disposición de la titulación académica.

Serían por lo tanto nulos los siguientes preceptos:

3.3. L'alcaldia i les regidories, i també les diverses dependències administratives o serveis, en la seva actuació administrativa han de redactar la documentació almenys en llengua catalana.

3.5. Els ordinadors i els serveis de telefonia mòbil han d'estar adaptats per al funcionament en llengua catalana. Els programes, i tot el material d'ofimàtica també s'hi ha d'adaptar, en la màxima mesura possible, així com aquelles aplicacions informàtiques dissenyades o adaptades per a usos específics de l'Ajuntament de Barcelona.

4.1. L'Ajuntament de Barcelona, en els contractes pels quals s'encarreguin a tercers estudis, projectes i treballs anàlegs, farà constar una clàusula en la qual s'especificarà que, en caràcter general, el treball s'ha de lliurar en llengua catalana. Excepcionalment, en el cas que la seva finalitat n'exigeixi la redacció en una altra llengua, se n'haurà de fer una versió en llengua catalana.

4.2. L'Ajuntament de Barcelona farà constar en el plec de condicions dels contractes administratius que aprovi l'Ajuntament de Barcelona que els seus adjudicataris de contractes presentin normalment la documentació en català i que facin ús del català en els béns i en els serveis que són objecte del contracte. En qualsevol cas, els prospectes, catàlegs i altres documents d'oferta de serveis estaran redactats, almenys, en català, sempre que es tracti d'empreses que tinguin establiments oberts al públic. Aquests requisits han de constar en el plec de condicions dels contractes administratius que aprovi l'Ajuntament.

4.3. L'ús de la llengua catalana figurarà entre els criteris determinants per a l'adquisició de béns i serveis, així com en els plecs de clàusules dels contractes públics sempre que de l'objecte dels mateixos béns i serveis se'n derivin comunicacions orals o escrites amb els usuaris o usuàries.

Article 8

Sens perjudici del previst a l'apartat 3 de l'art. 15 de la Llei de política lingüística, els documents públics i els contractuals atorgats per l'Ajuntament de Barcelona s'han de redactar en català. En cas que l'Ajuntament de Barcelona concorri junt amb altres atorgants, el document s'ha de redactar també en la llengua que s'acordi.

14.3. Quan els impresos, tríptics i altres escrits de les entitats o les institucions de l'àmbit lingüístic català, o les d'abast estatal o supraestatal, que arribin per tal de fer-ne la difusió, no siguin redactats en llengua catalana, l'Ajuntament de Barcelona en sol·licitarà formalment la versió en aquesta llengua, sense perjudici de la seva difusió d'acord amb la legislació vigent.

Article 19

19.1. En el procés de selecció per accedir a places de personal de l'Ajuntament de Barcelona, inclòs el personal laboral, s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com, si escau, en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places de què es tracti i, per tant, en les convocatòries per a l'accés ha de figurar el requisit i el nivell exigít de coneixement de català.

19.2. L'alcalde o l'alcaldesa ha d'establir en les bases de les convocatòries el nivell de català que han d'acreditar els aspirants, d'acord amb la legislació de la funció pública.

Article 20

20.1. L'alcalde o l'alcaldesa, a l'hora de definir els llocs de treball, d'acord amb el que disposa l'article 6.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, ha de considerar com a

requisit per accedir-hi el coneixement oral i escrit de la llengua catalana que els faci aptes per desenvolupar llurs funcions des del punt de vista lingüístic.

20.2. En la provisió de llocs de treball, tant de promoció interna com de convocatòria o contractació pública, inclosos els cossos amb habilitació estatal, els candidats han d'estar capacitats i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, que els faci aptes per desenvolupar llurs funcions des del punt de vista lingüístic. Per a cada convocatòria l'òrgan competent haurà d'establir els nivells respectius de coneixement oral i escrit exigible.

Article 21

Un membre del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona o de l'entitat o òrgan municipal que es determini en la convocatòria ha de formar part dels tribunals qualificadors en qualitat d'assessor o assessora, pel que fa a la valoració dels coneixements de català, en els procediments de selecció de personal i de provisió de llocs de treball.

Article 22

22.1. L'Ajuntament de Barcelona facilitarà la formació de llengua catalana a tot el personal funcionari i laboral perquè, d'acord amb els criteris i terminis que fixi l'alcalde o l'alcaldesa, a proposta de la Comissió interdepartamental de seguiment del Reglament, puguin assolir el nivell de coneixements necessaris per exercir les seves funcions i per millorar el nivell de llenguatge administratiu o d'altres especialitats. A aquest efecte l'Ajuntament de Barcelona treballarà de manera coordinada amb el Centre de Normalització Lingüística de Barcelona i amb aquells ens, organismes o entitats que consideri oportuns.

22.2. Les persones responsables dels diferents òrgans de l'Ajuntament de Barcelona, han de prendre les mesures necessàries perquè el personal que treballa en les seves dependències tingui els coneixements necessaris de català per garantir el desenvolupament correcte, des del punt de vista lingüístic, de les tasques internes o adreçades als administrats i a les administrades.

Article 23

23.1. Per tal de garantir el compliment d'aquest Reglament, es crearà una Comissió interdepartamental de seguiment integrada almenys per l'alcalde o alcaldessa i els regidors o regidores que aquest/a designi, el secretari o secretària general, el/la cap de personal, el/la responsable del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, un/a representant del comitè d'empresa i un/a altre/a de la junta de personal i les altres persones que designi l'alcalde o alcaldessa. La seva presidència recaurà en l'alcalde o alcaldessa o en la persona en qui aquest/a delegui.

Article 29

L'Ajuntament de Barcelona garantirà, en l'àmbit de les seves competències l'aplicació de l'article 26 de la Llei 3/1993, de 5 de març, de l'estatut del consumidor i de l'article 30 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en el sentit que les seves empreses i les empreses concessionàries que gestionen o exploten el servei concedit, han d'emprar normalment el català en llurs actuacions i documentació internes i en la retolació. Així mateix, les instruccions d'ús, l'etiquetatge i l'embalatge dels productes o els serveis que produeixen o ofereixen han de ser, com a mínim, en català.

Por todo ello se propone sustituir las expresiones "catalán" o "lengua catalana" por las de "castellano o catalán" o "castellano y catalán" según los casos.

5.- ALEGACIONES RELATIVAS A LA PREVISIÓN DE QUE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL SE PROMULGUEN SOLO EN UNA LENGUA, Y TENGAN VALOR JURÍDICO SÓLO EN ÉSTA, DE MANERA QUE SIMPLEMENTE SE TRADUZCAN A LA OTRA, PERO SIN VALOR JURÍDICO

El TC tiene señalado, que las normas jurídicas se han de promulgar al menos en castellano, con valor de texto auténtico, y no de mera traducción. El TC no ha admitido siquiera, que entre ambas versiones (castellana y cooficial), el texto promulgado también en lengua cooficial pueda tener preferencia en aras a la solución de discrepancias interpretativas.

“No siendo esto lo que dice el precepto impugnado, que otorga el carácter de texto auténtico sólo al catalán, debe ser declarado inconstitucional”. (STC 83/1986, FD. 3º in fine).

Por ello, sería nula la previsión de que las normas jurídicas promulgadas en virtud de la potestad reglamentaria del Ayuntamiento, lo sean sólo en catalán, y la versión castellana tenga tan sólo virtualidad de mera traducción.

Article 13

Les disposicions de caràcter general de l'Ajuntament de Barcelona s'han de publicar en català i, quan correspongui, se n'ha de fer la traducció al castellà.

En consecuencia se propone que las normas se publiquen en castellano y catalán, con igual valor jurídico.

6.- ALEGACIONES RELATIVAS A LA PÉRDIDA DE RANGO DEL CASTELLANO, QUE A PESAR DE SER LENGUA OFICIAL, QUEDA RELEGADO A SU EQUIPARACIÓN CON OTRAS LENGUAS EXTRANJERAS

El rango del castellano, lengua oficial en Cataluña, no puede quedar rebajado hasta el punto de quedar equiparado con lenguas extranjeras.

Así ocurre en el siguiente precepto, en el que no se prevé su uso oficial, y en el que sólo puede tener cabida, como lengua equiparable a una lengua extranjera:

Article 14

14.1. Els llibres, les revistes i, en general, tots els cartells, opuscles i publicacions que editi l'Ajuntament de Barcelona, com també els missatges que s'emetin a través dels mitjans de comunicació i la publicitat institucional, s'han de fer normalment en català, llevat dels específicament destinats a la promoció exterior, als usos turístics, o quan altres circumstàncies ho aconsellin, que es poden fer en la llengua de les persones destinatàries. Per a la mediació intercultural també es poden fer en la llengua de les persones destinatàries, acompanyats de la versió en llengua catalana.

Por lo tanto, se prevé la sustitución de la expresión en “catalán” y “lengua catalana” por las de “castellano o catalán” o “lengua castellana o catalana”.

7.- ALEGACIONES RELATIVAS A LA LIMITACIÓN DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO, Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN, AL PRIVAR DE CARÁCTER NORMAL AL USO DE UNA LENGUA OFICIAL A LOS CARGOS ELECTOS

La previsión de que los cargos electos, únicamente puedan utilizar con normalidad una de las dos lenguas oficiales en Barcelona, y no ambas, vulnera el derecho del ciudadano a acceder a los cargos públicos (art. 23.2 Constitución). Ello es así, porque menoscaba el ulterior ejercicio de dichos cargos, a quienes no conozcan el catalán, siendo así que la Constitución sólo establece el deber de conocimiento del castellano (art. 3).

Cada vez que un cargo público que no domine el catalán, o que simplemente lo prefiera, se expresara en castellano, debería soportar los efectos jurídicos de muy diversa índole, que derivarían de la calificación de su actuación como no normal, mermando su capacidad de actuación política.

En definitiva, ello equivale al establecimiento de una causa de inelegibilidad por vía reglamentaria, lo cual vulnera además el principio de reserva de Ley del art. 23.2 de la Constitución.

“El artículo 23.2 de la CE consagra el derecho del ciudadano a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. La elegibilidad es a tenor del artículo 70.1 CE un derecho ciudadano configurado por las leyes y delimitado negativamente por la ausencia de causas de inelegibilidad, que se inserta en el marco del artículo 23.2, de modo que, desde este parámetro, no podrá negarse a quien, estando en el pleno uso de sus derechos políticos, no esté incurrido en causas de inelegibilidad, definidas en la CE y por remisión, en la Ley electoral, interpretadas dentro del marco constitucional”. (STC 45/1983 de 25 mayo, FD. VI).

Pero no sólo constituye una causa de ineligibilidad, sino que también constituye una restricción injustificada del ejercicio de los derechos de libertad de expresión (art. 20 CE) y de participación en los asuntos públicos (art. 23 CE).

Así, el TC tiene sentado que la libertad de expresión cobra un alcance mayor, cuando se realiza en el ejercicio del derecho de participación política.

“No cabe duda de que cuando estas libertades operan como instrumento de los derechos de participación política debe reconocérseles si cabe una mayor amplitud que cuando actúan en otros contextos, ya que el bien jurídico fundamental por ellas tutelado, que es también aquí el de la formación de la opinión pública libre, adquiere un relieve muy particular en esta circunstancia,

haciéndoles «especialmente resistente(s), inmune(s) a las restricciones que es claro que en otro contexto habrían de operar» (STC 157/1996, fundamento jurídico 5º, aunque se refiere a un ámbito distinto del electoral)” (STC 136/1999 de 20 julio, FD. XV).

En estos casos, los límites son muy estrictos, estando constituidos por las vulneraciones del derecho al honor, y por la comisión de hechos delictivos:

“Sin embargo, también en este caso y por el mismo motivo que el señalado respecto de los derechos del art. 23 CE, no cabe considerar ejercicio legítimo de las libertades de expresión e información a los mensajes que incorporen amenazas o intimidaciones a los ciudadanos o a los electores , ya que como es evidente con ellos ni se respeta la libertad de los demás, ni se contribuye a la formación de una opinión pública que merezca el calificativo de libre” (STC 136/1999 de 20 julio, FD. XV).

“el derecho a expresar libremente opiniones, ideas y pensamientos [art. 20.1 a) CE] dispone de un campo de acción que viene sólo delimitado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para su exposición” (SSTC 105/1990, de 6 de junio, F. 4, y 112/2000, de 5 de mayo, F. 6),

Por lo tanto, dado que en este caso no puede entenderse que la utilización de una lengua oficial, pueda resultar ni atentatoria contra el honor de nadie, ni delictiva, no cabe considerar no normal el uso del castellano, con el consiguiente límite a la libertad de expresión de los cargos públicos, reconocida en los arts. 20 y 23 de la Constitución.

El precepto siguiente sería nulo:

Article 15

Els càrrecs de l'Administració municipal, siguin o no electes, s'han d'expressar normalment en català en els actes públics celebrats i les actuacions fetes dins l'àmbit lingüístic català, quan la intervenció sigui per raó del càrrec o representin la corporació sense perjudici d'utilitzar també altres llengües.

Se propone por tanto, suprimir este precepto, o sustituir la expresión “catalán” por “catalán o castellano”, y sustituir la expresión “ámbito lingüístico catalán” por la de “la CCAA de Cataluña”.

8.- ALEGACIONES RELATIVAS A LA INNECESARIEDAD DEL FOMENTO DEL USO DEL CATALÁN, DADO QUE SU USO YA ES CERCANO AL 50%

Como ya se ha dicho anteriormente, según la STC 337/1994, la situación de la lengua catalana en 1983, justificó las normas que TRANSITORIAMENTE han podido tener por objeto la normalización del catalán. El objeto era corregir la situación de una lengua “*marginal o secundaria*”, en “*situación de precariedad*”, como producto de una “*desigualdad histórica*”, no exenta de “*prohibiciones y persecuciones*”

El OBJETIVO FINAL de tales normas era, como no podía ser de otra forma, garantizar el uso normal y oficial del catalán y del castellano.

En consecuencia, atendido que en Cataluña hay dos lenguas, el objetivo del fomento del uso de una de ellas, sólo puede consistir en alcanzar unos porcentajes de uso cercanos al 50%.

El propio TC ha sentado el mismo criterio en un caso similar.

Es decir, un caso en que existían dos bienes jurídicamente protegidos, pero en que uno de ellos había experimentado con anterioridad a la Constitución, una situación legal y material de preterición histórica. Un caso en que, pese a que ambos bienes han disfrutado de un régimen legal de igualdad desde la vigencia de la Constitución, la situación de desigualdad persistía. Para superar dicha situación, la STC 12/2008 ha admitido la constitucionalidad de una Ley que:

“no establece una medida de discriminación inversa o compensatoria (favoreciendo a un sexo sobre otro), sino una fórmula de equilibrio entre sexos, que tampoco es estrictamente paritaria, en cuanto que no impone una total igualdad entre hombres y mujeres, sino la regla de que unos y otras no podrán integrar las candidaturas electorales en una proporción inferior al 40 por 100 (o lo que es lo mismo, superior al 60 por 100). Su efecto, pues es bidireccional, en cuanto que esa proporción se asegura igualmente a uno y otro sexo” (STC 12/2008 sobre la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres que modificó la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, F.D. 3º, párrafo I in fine).

Aplicando el mismo criterio, la eventual normalización del catalán, debería haber consistido en una fórmula de equilibrio entre lenguas.

De manera que el fomento sólo fuera necesario cuando se detectara que el uso de una u otra lengua se redujera a una proporción inferior al 40% (u otro porcentaje similar).

Y de forma que su efecto fuera bidireccional, en cuanto que esa proporción se asegurara igualmente a una y a otra.

Además, en la situación actual, según el Instituto de Estadística de Cataluña, el catalán está muy lejos de una situación de precariedad puesto que lo entiende un 93,8% y escribe un 56,3% de los catalanes. Por otra parte, está lejos de ser una lengua marginal o secundaria,

puesto que es de uso habitual para un 47,59% de la población (35,64 % exclusivo + 11,95 % indistinto con el castellano).

En consecuencia los siguientes preceptos serían inconstitucionales:

Article 25

25.1. L'Ajuntament de Barcelona ha de fomentar l'ús del català en la publicitat que es fa en la via pública i en les activitats laborals, professionals, mercantils, culturals, associatives, esportives, lúdiques i de qualsevol altra mena d'àmbit municipal.

25.2. De les tasques que es duguin a terme per impulsar institucionalment la normalització lingüística a Barcelona, se n'ocupa l'Ajuntament de Barcelona a través del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, o en col·laboració amb aquest organisme.

25.3. Tots els organismes de l'Ajuntament de Barcelona han d'impulsar la normalització lingüística en el seu àmbit d'actuació, amb el suport tècnic del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona i d'acord amb els criteris que estableixi la Comissió interdepartamental de seguiment d'aquest Reglament.

Article 28

D'acord amb la es lleis, l'Ajuntament de Barcelona pot establir subvencions, bonificacions i exempcions fiscals per a les actuacions relacionades amb la normalització i el foment de l'ús de la llengua catalana al municipi.

Se propone sustituir las expresiones "catalán" y "lengua catalana" por las de "aquella de las lenguas oficiales, cuyo uso habitual descienda por debajo del 40% en el ámbito municipal".

9.- ALEGACIONES RELATIVAS A LA VULNERACIÓN DEL DERECHO AL NOMBRE AL PREVER LA TRADUCCIÓN DE LOS NOMBRES PROPIOS Y APELLIDOS.

El derecho a ostentar un nombre y unos apellidos, es inherente a la dignidad de la persona humana, intransmisible e inalienable. Sólo a cada persona, le corresponde decidir sobre su propio nombre y apellidos, con arreglo a las leyes.

Por eso los arts. 54 y 55 de la Ley de 8 junio 1957 del Registro Civil (en la redacción dada por la Ley 40/1999, de 5 noviembre), atribuyen el derecho a la traducción del nombre y los apellidos de la persona, exclusivamente a la misma o a sus representantes legales:

Artículo 54.

“ ...

A petición del interesado o de su representante legal, el encargado del Registro sustituirá el nombre propio de aquél por su equivalente onomástico en cualquiera de las lenguas españolas”.

Artículo 55.

“ ...

El encargado del Registro a petición del interesado o de su representante legal, procederá a regularizar ortográficamente los apellidos cuando la forma inscrita en el Registro no se adecue a la gramática y fonética de la lengua española correspondiente”.

En consecuencia, en la medida en que la previsión reglamentaria, puede suponer la traducción del nombre y apellidos de una persona, sin su consentimiento, sería ilegal el precepto siguiente:

26.2. L'Ajuntament de Barcelona prendrà les mesures necessàries per garantir que s'usi la toponímia oficial catalana, incloent-hi la forma catalana del nomenclàtor de carrers i vies, i per la creació de denominacions genuïnes en la nova toponímia que sorgeixi de l'expansió o remodelació de l'espai urbà.

Por lo anterior, se propone que se sustituya la expresión “oficial catalana” por “oficial” y “la forma catalana” por “la forma oficial”

10.- Alegaciones relativas a la previsión de red denominación de regiones y localidades de otras Comunidades Autónomas.

La denominación oficial de las CCAA y de los Entes Locales de su territorio, se rige por lo establecido en sus respectivos Estatutos de Autonomía, y su legislación propia.

De igual manera que el Estado reconoció la denominación tradicional catalana de Lleida y Girona mediante la Ley 2/1992, de 28 febrero, es conveniente que el Ayuntamiento de Barcelona, reconozca la denominación oficial que con arreglo a su normativa propia, tengan las distintas CCAA y localidades del resto de España.

Por todo ello se propone que en los siguientes artículos, se sustituya la expresión “oficial catalana” por “oficial” y “la forma catalana” por “la forma oficial”:

26.2. L'Ajuntament de Barcelona prendrà les mesures necessàries per garantir que s'usi la toponímia oficial catalana, incloent-hi la forma catalana del nomenclàtor de carrers i vies, i per la creació de denominacions genuïnes en la nova toponímia que sorgeixi de l'expansió o remodelació de l'espai urbà.

27.2. En la senyalització i en qualsevol suport d'àmbit municipal, la toponímia emprada serà sempre la de la seva forma catalana.

Por todo ello

SOLICITA que tenga por formuladas las anteriores alegaciones y estimándolas, las incorpore al texto que se apruebe definitivamente.

En Barcelona a 21 de diciembre de 2009.